

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos N° 5-2011, de la Corte de Apelaciones de Concepción, iniciados para investigar los apremios ilegítimos y el homicidio en la persona de Ricardo Antonio Barra Martínez, por sentencia de primera instancia, de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, escrita a fojas 1.889 y siguientes, complementada por dictamen de 17 de abril de 2019, según obra a fojas 2.106, pronunciada por el señor Ministro en Visita Extraordinaria don Carlos Aldana Fuentes, se absolvió al acusado Juan Humberto Utrera Chávez, de la acusación judicial, adhesión y acusaciones particulares que le atribúan participación en calidad de autor en el delito de aplicación de tormentos y/o tortura al detenido, del artículo 150, numerales 1 y 2 del Código Penal y como autor del delito de homicidio simple en la persona de Ricardo Barra, en su caso.

Condenó a Aníbal Octavio Aravena Miranda y Omar Antonio Dapick Bitterlich, como autores del delito de aplicación de tormentos por funcionarios públicos al detenido don Ricardo Antonio Barra Martínez, ilícito previsto en el artículo 150, N° 1, del Código Penal —en su redacción vigente a la época de los hechos— perpetrado el 27 de septiembre de 1973, en Tomé, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, a las accesorias legales y al pago de las costas penales de la causa.

Enseguida, condenó a Patricio Enrique Salamanca Marín, en calidad de autor material del delito de homicidio simple en la persona de don Ricardo Antonio Barra Martínez, previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del Código Penal, cometido en el Fuente Borgoño, Regimiento DIM Aldea de Talcahuano, el 28 de septiembre de 1973, a la pena de tres años y un día de



presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales y a la costas de la causa. Asimismo, condenó a Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra, en calidad de autor inductor del referido ilícito, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias legales y a las costas de la causa.

En el aspecto civil, condenó al Fisco de Chile a pagar por concepto de indemnización por daño moral a Pedro Barra Martínez, hermano de la víctima, la suma de \$40.000.000, con los reajustes e intereses dispuestos en el fallo.

Impugnada dicha decisión a través de sendos recursos de casación formal y apelación, la Corte de Apelaciones de Concepción, por sentencia veinticinco de agosto de dos mil veinte, escrita a fojas 2.211 y siguientes, desestimó la casación en la forma, confirmando la sentencia de primer grado y su complemento.

Contra el fallo de segundo grado, las defensas de los sentenciados Salamanca Marín y Alarcón Saavedra, recurrieron de casación en el fondo.

Por dictamen de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, escrito a fojas 2.263, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que, el arbitrio propuesto por la defensa del sentenciado Patricio Salamanca Marín se cimenta en la causal de casación sustancial prevista en el artículo 546, N° 1, en relación al numeral 7° del mismo artículo, en conexión con el artículo 488, numerales 1° a 5°, todos del código de enjuiciamiento criminal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil y, los artículos 15 y siguientes del Código Penal.

Afirma que, la sentencia que impugna, ha incurrido en un error de derecho al establecer la participación punible de su defendido, en calidad de



autor del delito de homicidio simple, señalando que la conducta desplegada por Salamanca Marín no resultó apta para conseguir el resultado homicida, vulnerándose las leyes reguladoras de la prueba y que, contrariamente, los elementos de cargo son aptos para su absolución.

Explica que los sentenciadores del fondo concluyeron su condena en mérito de las presunciones las cuales, sin embargo, no reúnen los requisitos establecidos en la ley para estimar que el hecho cierto, relacionado con la lógica, con los elementos de la ciencia y, finalmente, con los elementos jurídicos, permita tener por acreditada su participación en el delito de homicidio en la persona de Ricardo Barra Martínez.

Luego de referir diversas piezas del proceso, da cuenta de la ausencia de dolo por parte de su defendido en el delito de homicidio, reiterando la causal del artículo 546, N° 1 del código adjetivo, al existir un error en la determinación de la participación culpable que se le ha atribuido y, respecto la segunda causal —546, N° 7 del mismo cuerpo legal— a las vulneraciones a las leyes reguladoras de la prueba. Argumenta que el fallo se escuda en la norma establecida en el artículo 488 del compendio adjetivo. Sin embargo, cuando se analiza dicha disposición, todos sus numerales se refieren a la participación mínima en los hechos por parte del encartado, no considerando lo concluido por el Informe Médico Legal y la declaración de un gran número de testigos. En dicho entendido, la sentencia que impugna no ha considerado un elemento científico que resulta irrefutable, como lo es dicho informe, ni los dichos de los testigos, presunciones que en su concepto, permiten arribar a conclusiones discordantes, que no resultan precisas, no conducen lógica y naturalmente a aquello que fue establecido en la sentencia, y si conducen a determinar que la



muerte de la víctima fue producto de las torturas a las que fue sometido en la Comisaría de Tomé y/o, posteriormente, en la Base Naval.

Asimismo, cuestiona la apreciación de la prueba efectuada en segunda instancia, refiriendo el valor probatorio de los instrumentos públicos y la veracidad de las declaraciones del funcionario público autorizante del Servicio Médico Legal, de acuerdo a lo dispuesto el artículo 477 del código adjetivo. Sostiene que las infracciones denunciadas han influido sustancialmente lo dispositivo del fallo, pues han llevado a los sentenciadores a conclusiones del todo erradas y arbitrarias, las cuales han perjudicado los derechos del encartado y que han motivado su condena, por lo que solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que lo absuelva de todo cargo, en los términos expuestos;

2º) Que, la defensa del encartado Julio Alarcón Saavedra funda la casación sustancial en la causal prevista en el artículo 546, Nº 7 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que en concepto de la impugnante, lo primero que reprocha en el fallo es la participación criminal atribuida a su defendido por parte de los sentenciadores del fondo.

Expone que la sentencia concluyó que el golpe de puño, que le fuera propinado por el coencausado Salamanca fue la causa que produjo el fallecimiento de la víctima, aun cuando de manera contradictoria, la propia sentencia de segunda instancia estableció que existe base suficiente para extender los apremios a la causa determinante de la muerte y ser considerados autores de homicidio, refiriéndose a los golpes y agresiones ocasionados por otras personas en la Comisaría de Tomé, arribándose a la conclusión de causa única de muerte, desatendiendo diversos elementos de convicción como son el certificado de defunción, el cual dio cuenta de la causa del fallecimiento como



muerte súbita, infarto cardíaco, junto con la declaración del encausado Salamanca, el informe del médico legista que indica que resultaba improbable que un golpe de puño único en la región torácica, en un hombre de 24 años, sin traumatismo previo, produzca su fallecimiento en un lapso de horas.

Argumenta que se sostuvo que los hechos se encontrarían dentro de los casos de concursos causales complejos, en los cuales los factores y condiciones que provocan la muerte en la víctima resultaron anteriores a la agresión del coencausado Salamanca, razón por la cual en su concepto no es posible atribuirle la calidad autor material, ni a su defendido la calidad de autor inductor, ya que Salamanca sólo habría colaborado con una condición, factor posterior o sobreviniente a un curso causal de muerte ya iniciado.

Refiere cuestionamientos en torno al dolo homicida y a la inducción, exponiendo que la prueba incorporada al proceso permite llegar a la convicción que no existió dolo homicida ya que, del análisis de los elementos de convicción incorporados al proceso, resulta posible concluir que el autor material no perseguía su muerte, no propuso ni creó en el inducido la voluntad de provocarle la muerte. Respecto a la participación atribuida a su defendido, la declaración del acusado es el único antecedente el tribunal para presumir que habría tenido participación en el hecho delictivo, no resultando racional otorgar valor probatorio a la declaración del encausado Salamanca, quien ha mentido reiteradamente en los procesos judiciales sustanciado por el ministro instructor.

Cuestiona, como única norma vulnerada, el artículo 488 del código adjetivo, señalando que no se dan sus presupuestos en ninguno de los cinco acápite esta dicha norma para que las presunciones judiciales puedan constituir plena prueba, refutando que se ha condenado a su defendido únicamente en base a sospechas y no a presunciones, exigiendo la presunción



los requisitos que señala, no existiendo un desarrollo de los requisitos de su procedencia y asimismo, el artículo 502 del compendio adjetivo obliga al sentenciador a expresarlo, invocando la proscripción de la presunción de derecho en torno a la responsabilidad penal del artículo 19, N° 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, por lo que pide la invalidación de la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que absuelva a Julio Alarcón Saavedra, con costas;

3º) Que, como se consigna en el motivo segundo de la sentencia de primer grado —reiterado en el fallo de alzada—, los sentenciadores del fondo tuvieron por demostrados los siguientes hechos:

“a) Que a raíz del pronunciamiento militar ocurrido el 11 de septiembre de 1973, se dictó con igual fecha el D.L. N° 3 que declaró a todo el territorio nacional en Estado de Sitio, asumiendo el control militar y administrativo de Tomé, como Jefe de Plaza y Gobernador de dicha Comuna, el Director de la Escuela de Grumetes de la Isla Quinquina, Capitán de Navío don Aníbal Octavio Aravena Miranda, junto a la Oficialidad y personal subalterno a su cargo, pertenecientes a la referida Escuela.

b) Que el 27 de septiembre de 1973, el Jefe de la Comisaría de Carabineros de Tomé, Mayor Juan Humberto Utreras Chávez recibió un llamado telefónico de una mujer, dándole cuenta que la casa signada con el N° 10, ubicada en el cerro Miramar, en un callejón paralelo a calle Ecuador, llegaron unas personas con mochilas y armamento, escuchándoles que querían asaltar la Comisaría y que bebían alcohol, procediendo a planificar el procedimiento de tención, para lo cual formó un piquete de Carabineros con apoyo de miembros de la Armada, llegaron al citado lugar, alrededor de las 18,00 horas de ese día, encontrando a cuatro personas, las que estaban



dormidas en el suelo y con armamento y explosivos a su alrededor, procediendo a detenerlas e identificarlas, cuyos nombres eran Héctor Lepe Moraga, Miguel Catalán Febrero, Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz y Ricardo Barra Martínez. Luego los trasladaron a la Unidad Policial, donde los interrogó personalmente respecto del motivo de la posesión de las armas y sus intenciones de atacar recintos policiales. Del procedimiento dio cuenta al Jefe de Plaza de Torné y a su jefe directo el Prefecto de Carabineros de Talcahuano.

Mientras los detenidos se encontraban en los calabozos de la Comisaría, también fueron interrogados —especialmente Barra Martínez— por oficiales de la Armada, con aplicación de torturas y rigor innecesario, como quemaduras con cigarrillos en el cuerpo, golpes de pie, puño y con objetos contundentes en el cuerpo y colgarlos de los pies para sumergirle la cabeza en un tambor con agua. Ello se desprende de las declaraciones de Isaura Lázaro Martínez de fs. 35, de Leonor Isabel Barra Martínez de fs. 35 vta., y de Pedro Rodolfo Barra Martínez de fs. 343, quienes están contestes en señalar que, por los dichos de su marido y padre respectivamente, quien retiró el cuerpo para su sepultura, presentaba golpes y quemaduras de cigarrillos, morada su piel y la camisa que usaba estaba ensangrentada, estado físico que es el resultado coherente con las formas de interrogar que tenían los miembros de carabineros y de las Fuerzas Armadas a los detenidos que se les atribuía actividades terroristas.

Entre algunos de los oficiales que realizaban estas prácticas se ha logrado identificar al Teniente—a esa época— Omar Antonio Dapick Bitterlich, quien dependía de Eduardo Silva Gordon (fallecido) y estos del Capitán de



Navío Director de la Escuela de Grumetes y Jefe de Plaza de Tomé, —lugar que se encontraba en estado sitio—, don Aníbal Octavio Aravena Miranda.

e) Al día siguiente (28 de septiembre de 1973), alrededor de las 11:00 horas, mediante parte policial N° 5 de 27 de septiembre de 1973, firmado por el Prefecto de Carabineros de Talcahuano y dirigido a la II Zona Naval (Fiscalía Naval de Talcahuano), Carabineros de Tomé puso a disposición y entregó materialmente a los cuatro detenidos al Jefe de Plaza de Tomé, Capitán de Navío Aníbal Octavio Aravena Miranda, junto al armamento incautado, los que fueron trasladados a la Fiscalía Naval de Talcahuano, custodiados por personal de la Armada, asentada en Tomé, ingresando los detenidos al Fuerte Borgoño, a cargo del DIM Aldea.

d) Que, en esas condiciones, Barra llegó al Fuerte Borgoño —según el testimonio de Ornar Dapick Bitterlich, a fs. 700 y de Raúl Silva Gordon (actualmente fallecido y que fue la persona que los entregó en Talcahuano) dónde fue recibido por personal de Infantería de Marina que le ofreció un ‘comité de bienvenida’, expresión utilizada para referirse a que se les recibió de una forma brusca, violenta e inhóspita.

e) Que estando ya detenido en el lugar denominado ‘La Ciudadela’, el Teniente Julio Alarcón Saavedra le dio orden al soldado conscripto Patricio Salamanca Mario —quien practicaba box— para que le diera un golpe a Barra Martínez, —quien se encontraba visiblemente torturado—, procediendo Salamanca a golpearlo fuertemente con el puño en la zona del bajo vientre, a raíz de lo cual la víctima se encogió de dolor, perdiendo el aliento y cayendo al suelo, a consecuencia de lo cual pierde la vida. La Armada de Chile informó que la causa del deceso había sido ‘Muerte súbita. Infarto cardíaco’, ocurrida a las 23:30 horas del día 28 de septiembre de 1973, registrándose así en el



certificado de defunción del detenido y el cuerpo fue entregado posteriormente a los familiares, en urna sellada”.

El hecho referido en los literales a), b) y c) fue calificado como constitutivo del delito de aplicación de tormentos por funcionarios públicos, ilícito previsto en el artículo 150, N° 1, del Código Penal —en su redacción vigente a la época de los hechos— perpetrado el 27 de septiembre de 1973, en Tomé. En este sentido se concluyó que, mientras la víctima se encontraba detenida, sus custodios lo interrogaron con aplicación de torturas y rigor innecesario.

El hecho referido en las letras d) y e) resultan constitutivos del delito de homicidio de Ricardo Barra Martínez, previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del Código Penal, cometido en el Fuente Borgoño, Regimiento DIM Aldea de Talcahuano, el 28 de septiembre de 1973. Resultó acreditado que la víctima se encontraba detenido, cuando un oficial de la Armada de Chile le dio la orden a un funcionario de la Armada que estaba bajo su mando, para que golpeará con los puños a la víctima, siendo impactado en la zona baja del vientre, a raíz de lo cual le provocó una muerte súbita;

4º) Que, el recurso de casación en el fondo propuesto por la defensa de Salamanca Marín esgrime —en rigor— en un mismo capítulo y de manera conjunta, las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, vicios de nulidad que se configurarían al habersele condenado como autor ejecutor del delito de homicidio simple, en los términos previstos en el artículo 15, N° 1 del Código Penal, en circunstancia que —alega— la prueba no cumple lo previsto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, por lo que debió ser absuelto por falta de participación en el ilícito.



La infracción del N° 1 de la norma ya citada, supone necesariamente que los hechos fueron correctamente establecidos y que los mismos resultan constitutivos de delito, para sostener igualmente la causal prevista en el 546, N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que —por el contrario— los acepta al esgrimir el primer motivo de invalidación.

Como se ve, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto, el que, por tal motivo, será rechazado (entre otras, SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017; 13.877-2019, de 24 de diciembre de 2021; y, 12.820-2019, de 8 de noviembre de 2021).

En efecto, los vicios que constituyen las hipótesis invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte;

5º) Que, tal forma de fundar la abrogación, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar —para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo— que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de Derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva, todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado, presenta fundamentos y peticiones alternativas y



excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio;

6º) Que, la jurisprudencia a este respecto es, como se ha visto, numerosa y sostenida, contando con decisiones muy recientes, que otorgan sólido respaldo a lo que se resuelve en estos casos, que es el rechazo de los recursos por razones que, si bien son formales, no pueden ser obviadas por esta Sala, atendida la función que le está encomendada como tribunal de casación.

Sabido es que este tribunal no es una instancia de apelación, en que proceda revisar uno a uno todos los hechos establecidos, aunque su apreciación conduzca a conclusiones contradictorias. A este respecto no es necesario añadir nada más, que no sea el parecer de la doctrina procesalista, divulgada a través de los textos conocidos;

7º) Que, sin perjuicio del defecto insalvable del recurso antes pesquisado, conviene aclarar que —a diferencia de lo alegado en el recurso— la sentencia de primer grado, al examinar la participación del encartado en el delito de homicidio simple, en los fundamentos decimoquinto y decimosexto, que la judicatura de segundo grado hace suyos, analiza que Salamanca Marín reconoció haber golpeado de puño en la zona baja a un detenido, producto de lo cual tomó conocimiento al día siguiente que había fallecido; asimismo, en encartado Omar Dapick Bitterlich señaló que, según dichos del Teniente Silva Gordon, la víctima Barra Martínez falleció cuando ingresó en la Base Naval, producto de un golpe de puño ocasionado por un soldado de la Armada, y teniendo presente que Barra Martínez falleció el 28 de septiembre de 1973 de muerte súbita, para cardíaco, según da cuenta el certificado de defunción, suscrito por el doctor Carlos Minoletti Massa (fallecido el 23 de mayo de 1998),



el 29 de septiembre de 1973, el que no logra ser desvirtuado por el informe del Servicio Médico Legal, que se trata de una opinión conforme a la revisión de las declaraciones que obran en el expediente, sin especificar el fundamento científico de su conclusión, en el sentido que estima improbable que un golpe de puño único en la región torácica de un hombre de 24 años, sin traumatismo produzca su fallecimiento en un lapso de horas, especialmente, porque no se refiere a la calidad de boxeador del agresor, en el sentido que sabía golpear y de forma muy contundente, concluyendo que los antecedentes antes referidos configuran un conjunto de presunciones judiciales, las que por reunir los requisitos señalados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por acreditado que el golpe que Salamanca Marín le propinó a Ricardo Barra Martínez le produjo la muerte y por consiguiente el tribunal adquirió convicción de su participación como autor ejecutor del delito de homicidio simple, en los términos indicados en el artículo 15, N° 1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

De esa manera, los elementos del ilícito examinado y la participación en ellos del acusado, se estimaron verificados por el tribunal de segundo grado en los hechos que se tuvo por establecidos, conclusión que esta Corte comparte, desde que, como fue refrendado en el motivo vigesimosexto a vigesimonoveno de la sentencia objetada, el adjudicador de primer grado, en el motivo decimosexto antes aludido, estimó comprobada su participación en el ilícito en calidad de coautor.

En consecuencia, el recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de Patricio Salamanca Marín será desestimado;

8º) Que, en lo que guarda relación con el recurso de casación sustancial propuesto por la defensa de Alarcón Saavedra, en torno a la vulneración



denunciada al artículo 488 del código adjetivo, tal norma establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, en este caso, de la participación del acusado en los delitos objeto de la sentencia.

De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba que pueden ser revisados en sede de casación, el contenido en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales y, del ordinal el 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Así, ha dicho antes este Tribunal al señalar: *“las exigencias contenidas en los ordinales N° 2 a 5 del artículo 488 para constituir prueba completa, como las relativas a su gravedad, precisión y concordancia, tampoco puede conseguirse por esta vía [recurso de casación], pues demanda juicios y valoraciones que escapan a un control acotado a errores de derecho propio de la casación de fondo”* (entra otras, SCS N° 32.259-2015, de 23 de diciembre de



2015. En el mismo sentido, N° 8758-2015, de 22 de septiembre de 2015); y, complementando lo anterior, ha declarado que el artículo 488 en estudio es norma reguladora de la prueba, *“sólo en cuanto establece una limitación a las facultades de los jueces del fondo para dar por probados los hechos litigiosos a través del uso de presunciones judiciales”*;

9º) Que, en razón de lo anterior, deberá desestimarse la infracción denunciada por el arbitrio al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, desde que las alegaciones que se efectúan en relación a esta disposición se dirigen a cuestionar los hechos establecidos como sostén de las presunciones judiciales atendida una supuesta insuficiencia de la prueba que sirvió para ese efecto o por la existencia de elementos probatorios que impedirían asentar tales hechos, cuestionamientos que, como reiteradamente se ha dicho, recaen más bien en la ponderación que hicieron los sentenciadores del cúmulo probatorio para ir estableciendo cada uno de los hechos que sirvieron para fundar las presunciones judiciales, convicción que no puede ser revisada por esta Corte si no se alega la infracción de una específica norma legal —distinta al artículo 488— que impida a los sentenciadores arribar a esas conclusiones del orden fáctico.

En plena concordancia con lo que se viene razonando, antes esta Corte ya ha declarado que *“conviene no olvidar que en un proceso jurisdiccional los únicos hechos que se tienen por probados son aquellos que así declara el propio órgano jurisdiccional mediante sus resoluciones, no hay otros, sin perjuicio que las partes del proceso, estimen que a la luz de la prueba conocida en sus distintas instancias, debió haberse declarado como acreditados otros hechos o circunstancias. Entonces, si hay o no hechos reales y probados que sirvan para cumplir el primer requisito del artículo 488, ello es una decisión*



estrictamente jurisdiccional, que en el caso de autos fue negativa como ya se indicó, de manera que la estimación que hace el recurrente de que con los diversos elementos de convicción que expone y analiza se encuentran probados una serie de hechos que sirven de base a presunciones que cumplen los requisitos exigidos por el artículo 488, no pasa de ser una apreciación y conclusión diversa a la que han arribado los sentenciadores de alzada que no da pie para sostener el arbitrio intentado” (entre otras, SCS N° 32.259-2015, de 23 de diciembre de 2015);

10º) Que, a mayor abundamiento, el fundamento decimoctavo de la sentencia de primer grado, mantenido en el fallo impugnado, fundó la decisión de atribuirle participación en calidad de autor inductor, en diversas piezas de la investigación. En primer lugar, en la imputación efectuada por Salamanca Marín, autor material de los hechos, quien señaló que Alarcón Saavedra le dio la orden para golpear a la víctima, golpeándolo en el pecho.

En el mismo sentido, declaró el encausado Dapick Bitterlich, señalando que Barra Martínez habría sufrido un golpe que le habría propinado el Soldado Salamanca y producto de ello el primero habría fallecido; las propias declaraciones de Alarcón Saavedra y el Oficio del Comandante del Destacamento, dando cuenta de la muerte de la víctima. Dichos elementos permitieron al tribunal formar convicción en la motivación decimonovena a través de presunciones, las que por reunir los requisitos señalados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permitieron tener por acreditado que el acusado Julio Alarcón Saavedra le dio la orden a su subalterno Salamanca Marín para que golpeara al detenido Barra Martínez, golpe que le produjo la muerte atendida la experticia de éste como boxeador, habilidad que el superior conocía, conclusión que fue refrendada en las



motivaciones trigésimo primera a trigésimo cuarta de la sentencia de segundo grado, de manera que los yerros atribuidos no logran verificarse, debiendo necesariamente desestimar el arbitrio propuesto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, **se rechazan** los recursos de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los sentenciados Salamanca Marín y Alarcón Saavedra, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción de veinticinco de agosto de dos mil veinte y que obra a fojas 2.211 y siguientes, la que por consiguiente, **no es nula**.

Regístrese y devuélvase con sus tomos y agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

N° 132.141-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R. y Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Ministro Sr. Brito y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por estar ausente, respectivamente.





Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

